

LA CRISIS POLITICA EN COLOMBIA: ALTERNATIVAS Y FRUSTRACIONES

Francisco Leal Buitrago

1. La Violencia como expresión de las crisis políticas

El experimento de la "Revolución en Marcha" del primer gobierno del presidente López Pumarejo (1934-1938) dejó en entredicho el problema político mayor de ese entonces, debido a la feroz reacción que desató su proyecto reformista. El gran atraso productivo y mercantil de una sociedad predominantemente agraria estaba sustentado en la preeminencia de una clase terrateniente que dominaba la escena política. Esta clase supo canalizar la reacción al reformismo para conservar su gran poder oligárquico aglutinador frente a las emergentes burguesías comercial e industrial y a las demás transformaciones de la estructura de clases en el seno de la sociedad colombiana. Allí radica uno de los factores más sobresalientes que configuraron el conflictivo proceso político que se inició durante la segunda administración de López Pumarejo (1942-1945) y que desembocó en los veinte años de la etapa histórica nacional conocida como la Violencia.

Entre 1946 y 1965 fueron percibidas varias crisis políticas interconectadas y superpuestas, y se pusieron en marcha varias soluciones encadenadas a las crisis. La Violencia y el movimiento guerrillero que inicialmente canalizó el bipartidismo se sumaron al peligro del establecimiento de un régimen corporativo y falangista, cuestiones que fueron solucionadas por el bipartidismo cor_ la entronización en

1953 de un gobierno militar. La Violencia fue revivida por la arrogancia militar, y se fusionó al riesgo de permanencia del general Rojas Pinilla en el poder, problemas que se zanjaron con el Frente Civil, la transacción del año de gobierno de la Junta Militar y el gran proyecto de solución del Frente Nacional a partir de 1958. La última etapa de la Violencia, convertida en acción de bandoleros por la desconexión explícita que de ella .hizo el bipartidismo frentenacionalista, tuvo finalmente su solución hacia el año 65 con el exterminio militar de sus cabecillas. De esta manera, las sucesivas pacificaciones transitorias sirvieron para materializar soluciones a crisis sucesivas que se identificaron con multifacéticas expresiones de violencia. En 1965 se cerró este capítulo, con la solución definitiva a la manifestación común a todos ellos: la mediación de la violencia por parte del bipartidismo.

El proyecto político del Frente Nacional recogió el viejo y álgido problema agrario y lo integró dentro de sus programas de transformación. Sin embargo, este problema había sufrido un vuelco general, principalmente por el advenimiento de una compleja organización capitalista dependiente, que modernizó el país sin alterar los parámetros básicos del poder político y de la concentración del poder económico. Esta rígida estructura del poder fue la que inhibió el reformismo social del Frente Nacional, no solamente en cuanto al problema rural con la reforma Agraria, sino también en problemas relacionados con otros sectores de la sociedad. En el fondo, el proyecto transformador se quedó únicamente en el plano político, cuyo nuevo régimen alteró de raíz la racionalidad anterior de los gobiernos hegemónicos de partido, para que entrara el bipartidismo a compartir hegemónicamente la administración del

Estado. Esta incapacidad reformista, que rubricaba el tradicional conservadurismo político nacional por lo menos desde el proyecto de la Regeneración, fue el que proyectó bien pronto una nueva violencia,' como síndrome colombiano de expresión de las crisis políticas.

La preeminencia del bipartidismo en el panorama nacional y la característica de gobiernos hegemónicos de partido del régimen político configuraron la violencia estructural como manifestación de las crisis políticas, con la apariencia de ser ante todo un enfrentamiento entre las dos colectividades. El proyecto político del Frente Nacional formuló la pacificación como meta principal y la convivencia bipartidista como su solución. De esta manera, se planteó la solución de una multifacética consecuencia que era la violencia, pero se dejaron de lado los factores de crisis no resueltos totalmente, como el problema agrario, la concentración del ingreso y la estructura oligárquica del poder. Por ello se solucionó la mediación que el bipartidismo había ejercido sobre la violencia y se eliminaron los reductos que de ella había heredado el Frente Nacional. Pero los factores de crisis se regeneraron, en la medida que fracasaron los esporádicos intentos reformistas que, como la reforma agraria, se estrellaron contra la rigidez de la organización política. Paralelamente apareció un nuevo tipo de violencia, liberada del bipartidismo y condimentada con los efectos secundarios de la emergente organización política. A partir de allí, fue gestándose una nueva crisis, con la particularidad de que escapaba del control tradicional del régimen e integraba nuevos elementos propios de la condición dependiente de una sociedad capitalista.

II. Los efectos secundarios del Frente Nacional

Quizás el subproducto más reconocido e importante del Frente Nacional sea la pérdida de fuerza y cobertura del bipartidismo. No hay duda de que existe una enorme diferencia entre el antiguo sectarismo de partido, ligado a la imprescindible matrícula de todos los colombianos al liberalismo o al conservatismo hasta los años cincuenta, y la pragmática militancia partidista de quienes están vinculados actualmente al Estado y el desdén con que muchos grupos miran hoy en día al bipartidismo. En menos de treinta años es sorprendente la transformación ocurrida entre el papel preponderante que cumplían en todos los órdenes de la vida social los partidos tradicionales, y el forzado carácter protagónico que hoy rebuscan éstos en la vida nacional. Esta despolitización del bipartidismo ha sido la materia prima básica que ha determinado relativamente el transcurso político nacional de los últimos veinte años por lo menos.

Con la disminución de la presencia del bipartidismo en el contexto político se produjo un desplazamiento progresivo de las relaciones de poder mediadas por los partidos, en busca de mediaciones alternativas. Surgieron, así, movimientos disidentes e intentos de constitución de numerosos partidos, dentro de una amplia gama ideológica. El Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y todas las expresiones de una nueva izquierda con pretensiones de constituirse en partidos, son ejemplos destacados de tal tendencia. Pero la respuesta de la organización política subsidiaria de las instituciones del Estado, es decir, el régimen político, fue contundente. Se generó un bloqueo, bien diversificado en sus métodos, a casi todas

las formas emergentes de participación política. Todo aquello que no pasara por el cedazo del bipartidismo recibía un tratamiento sistemático, sutil o descarado, de anulación.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que continuara el proceso de debilitamiento del bipartidismo, solamente que su resultado fue la dispersión política. Aparte de la cuantiosa ciudadanía que se despreocupó de la política, numerosas expresiones de la lucha continuaron porfiando bajo los parámetros políticos formalmente permitidos. Pero también fueron muchas las manifestaciones que se entroncaron en la ilegalidad, obligadas por las circunstancias de acoso del régimen, de estímulo de la naciente Revolución Cubana y de frustración por la crisis económica. La herencia de la violencia con sus guerrillas partidistas fue un ejemplo histórico para la formación de guerrillas radicalizadas: FARC, ELN, EPL, M-19 y todas las siglas y nombres suficientemente conocidos desfilaron poco a poco por la portada de una vieja pero remozada forma de hacer política. En síntesis, el proceso de crecimiento del número de expresiones políticas que se ubicaron fuera del campo de mediación del régimen nunca se detuvo. Se combinaron caprichosamente acciones legales, ilegales y subversivas para enfrentarse a la camisa de fuerza del bipartidismo, que trató, por todos los medios a su alcance, de monopolizar la práctica política de la sociedad.

El Frente Nacional coincidió con la necesidad de expansión del Estado Institucional, imperativo propio de una organización capitalista dependiente que se afianzaba. Esta necesidad coincidía con la urgencia del régimen de fortalecer las instituciones del Estado, para

contrarrestar, el debilitamiento ideológico y de cobertura de un bipartidismo que constituía su esencia misma. Comenzó, así, no solamente un proceso de creación de diversas instituciones oficiales, sino también de controles, directos o indirectos, de los recursos disponibles en la sociedad. Naturalmente, la constante expansión presupuestal del Estado fue una resultante obligada del proceso. A partir de allí, la administración pública tuvo a su disposición un número creciente de recursos y controles, con la característica especial que la prioridad de su utilización tendió a adecuarse a las necesidades de sostenimiento del bipartidismo.

No obstante, el problema no consistió únicamente en el hecho que el inventario político del Estado estuviese ante todo al servicio de la oxigenación permanente de los dos partidos tradicionales. Al respecto, podría pensarse que emergía un Estado institucional fuerte, cuya administración monopólica se ponía al servicio del liberalismo y el conservatismo, cuestión ya de por sí bastante delicada. Pero este aparente fortalecimiento no ocurrió. La dinámica del ejercicio político colocó a las relaciones de clientela en el eje de la vida política absorbida por el régimen. No se trataba solamente de que permaneciesen estas viejas prácticas. Se trataba, ante todo, de que conformaban el armazón que guiaba al resto de relaciones políticas administradas por el bipartidismo, cuya consecuencia fue una tendencia a la privatización de sus beneficios. Se generó, así, un Estado institucional con gran capacidad de movilización de recursos económicos y de todo tipo, pero con una privatización inmediata de los beneficios obtenidos por su utilización; un Estado institucional políticamente débil, con una paradójica necesidad de so-

cialización. Esta situación mostró mayor notoriedad, en la medida que la pérdida de presencia del bipartidismo estimuló su fragmentación. El faccionalismo partidista atomizó la capacidad de brindar beneficios por parte del Estado, afectando la eficacia de las políticas de planificación y facilitando una visión de utilidad privada de las decisiones políticas.

El legado ideológico del formalismo jurídico colombiano, uno de cuyos contenidos es la legitimación política por la vía electoral, fue el gran motor de este complejo sistema de organización pública. El sentido de la autoridad legítima debe contar con la bendición electoral, sin que importen los medios para que se logre. En tales circunstancias, un capital electoral constituye la base primordial para disponer de cualquier iniciativa política; es la llave que abre todas las puertas de la administración pública. El problema para la llamada "clase política" consiste, entonces, en conseguir y mantener un capital electoral, lo que llevó al bipartidismo a la utilización para el efecto de los recursos estatales a su disposición. De tal manera, prácticamente toda decisión política tiene el sello de una especie de "acumulación de capital electoral" como objetivo, con el agravante que el costo económico de esta "acumulación" es cada vez mayor, por razón de la competencia de un faccionalismo partidista en expansión. En aparente paradoja, a medida que han crecido los recursos a disposición de la administración política, éstos se han tornado insuficientes para alimentar la reproducción del régimen. Por una parte, al Estado institucional se le dificulta cada vez más contrarrestar la tendencia ya señalada de marginamiento de las relaciones políticas del campo de mediación del régimen bipartidista. Por otra, el Estado institucional ha venido err

retroceso en su capacidad de redistribuir el ingreso nacional. Ambas limitaciones han traído como consecuencia el afán de consecución de nuevos recursos para el Estado y su transformación en una especie de botín, en el que no solamente está presente el objetivo señalado de acumulación de capital electoral, sino que contiene también un germen de ineficiencia burocrática y otro de corrupción administrativa.

III. La crisis del régimen político bipartidista

Los parámetros que permiten definir la presente crisis del régimen político vigente pueden sintetizarse en los dos fenómenos principales que surgieron de la puesta en marcha del proyecto frentenacionalista y que fueron explicados en el título anterior. El primero de ellos se refiere a que el sistema político que administran los gobiernos del bipartidismo no posee control ni mediación sobre gran parte de las expresiones de poder existentes en la sociedad colombiana. En este caso, no solamente se tienen en mente las actividades subversivas como la guerrilla, que son bien numerosas, sino también expresiones como los paros cívicos y todos aquellos procesos políticos que se han salido de las manos de los partidos tradicionales. Hay que tener en cuenta que aún existe una identidad entre el régimen y el bipartidismo que mantiene el monopolio de su administración.

El segundo de los fenómenos ya explicados señala que a pesar de la gran capacidad que tienen las instituciones del estado de movilizar y controlar recursos de todo orden, el beneficio inmediato de su utilización tiende a ser privado. En otras palabras, hay un debilitamiento del Estado por insuficiencia en la obvia

socialización que deben tener los beneficios colectivos que definen una de sus funciones básicas. Las relaciones sociales que comandan este fenómeno constituyen la intrincada red social del clientelismo, como medio articulador del sistema político.

A partir de estos dos fenómenos se ha desarrollado un complejo sistema de consecuencias que cubre prácticamente todos los aspectos destacados de la vida nacional. Quizás la determinación más visible sea la significativa disminución de la credibilidad social que tiene el régimen como conjunto, o sea, lo que puede denominarse crisis de legitimidad. Esta pérdida de confianza de la sociedad civil en el régimen bipartidista está emparentada con la crisis de los partidos tradicionales sin ser exactamente lo mismo. La debilidad muy variable de cada partido naturalmente refuerza la crisis de legitimidad, puesto que al fin y al cabo son los dos partidos el soporte del régimen. Pero lo que en el fondo se cuestiona son las reglas del juego político que éstos administran mancomunadamente. De ahí que se le vea poco futuro a proyectos políticos que se apoyen en una revitalización del bipartidismo.

El hecho de que esté en entredicho social la credibilidad del régimen no significa que éste se vaya a derrumbar. Aquí operan mecanismos de defensa como los que alimentan su misma reproducción. Muestra de ello es el ya señalado legalismo jurídico, cuyo papel de legitimador formal, por ejemplo en el plano electoral, conforma uno de los puntos de apoyo de su continuidad. Así mismo, es también conveniente indicar que la presencia de una crisis de legitimidad no implica que exista una crisis de hegemonía o una crisis de dominación.

Esta última tiene un trasfondo mucho más profundo y se refiere al cuestionamiento popular de las normas básicas establecidas para los procesos de producción económica. Indudablemente que aquí no radica el problema y su confusión puede originar planteamientos políticos totalmente errados. Por ejemplo, una apreciación de crisis de dominación puede equivaler a definir la situación social como prerrevolucionaria, ya que la revolución es la respuesta de solución a este tipo de crisis. Tal parece que la evaluación política que hacen los grupos guerrilleros frecuentemente cae en esta trampa, lo que refuerza su posición militarista. Por su parte, la crisis de legitimidad es solamente parte de lo que podría ser una crisis de hegemonía: el debilitamiento de la credibilidad en el régimen político.

Pero el problema de fondo de la larga permanencia de una situación determinada por una crisis de legitimidad es el deterioro que provoca en el conjunto de la sociedad. Este deterioro podría converger en una crisis de dominación, aunque las probabilidades son remotas. Lo que sí es suficientemente claro es el efecto de descomposición social que ha inducido la indefinición de la crisis de legitimidad del régimen. Es una situación de progresivo encadenamiento de fenómenos que cada vez son más difíciles de relacionar con las causas macropolíticas primarias que identifican la naturaleza de la crisis. Por ejemplo, por su carácter claramente político, el común desinterés por los partidos políticos, excepto cuando se trata de derivar de ellos un beneficio directo generalmente inmediato, la incredulidad en los planteamientos y aún en las medidas del gobierno, el abandono político de la justicia y su consecuente inoperancia son,

entre otros, fenómenos destacados que pueden relacionarse sin dificultad con la crisis de legitimidad del régimen. Pero no es fácil ligar con ella, por su aparente falta de relación, con la política, aspectos como la relativa generalización de la delincuencia común y la inseguridad que de ella se deriva, o la formación de guardias pretorianas para la defensa de los poderosos o de ejércitos privados para la seguridad de residencias, oficinas particulares y hasta dependencias del Estado. Tampoco es fácil vincular la pérdida de espíritu cívico de la sociedad civil, o la ausencia de ética en las relaciones económicas, o la misma agresividad ciudadana, con la persistencia de una crisis política. Todas estas manifestaciones de descomposición social son las que a diario se acrecientan en el "normal" transcurrir de casi todos los estratos y clases sociales del país, debido a que las instituciones del Estado no poseen la capacidad instrumental y ética para prevenir que ello ocurra.

En la anterior lista de fenómenos comunes, derivados directa o indirectamente de la persistencia de la crisis, no se ha mencionado el problema del narcotráfico, que también tiene sus nexos con el asunto central que se debate. Dentro de lo apretado de esta exposición es necesario consignar al respecto unas ideas. Actualmente, casi ya no se cuestiona la inducción que este problema tuvo desde el exterior, concretamente desde los Estados Unidos, tanto en el plano del consumo como en el de su política oficial. Sin embargo, esta inducción no hubiese llegado a los niveles en que se encuentra, sin la ayuda de ciertas condiciones internas. La ubicación geográfica estratégica del país, pero sobre todo la polarización económica de la sociedad colombiana entre la opulencia y la miseria popular configuraron el medio

adecuado para el desarrollo del narcotráfico, así como lo ha sido para ciertas causas de la misma crisis, como las altas restricciones a la participación social, económica y política. En este ambiente estructuralmente conservador, en el que la crisis política llegó a identificarse con sus consecuencias de descomposición social, el surgimiento de banderas políticas moralistas fue bastante lógico. Naturalmente, uno de los blancos más fáciles de señalar en tales circunstancias fue el narcotráfico, máxime con los antecedentes inmediatos de la marihuana. De ahí en adelante, "el país" conoce la triste historia de quien cae en la arena movediza y a medida que aumenta sus esfuerzos por escapar, resulta más firmemente atrapado. No ha habido, con escasas excepciones, nadie que mire el problema desde el punto de vista político. Si acaso, con la doble moral con que se han caracterizado muchas declaraciones y actuaciones públicas, se acepta, se tolera y se disimula el asunto, gracias a los beneficios económicos que arrastra, desde los privados hasta los de las finanzas públicas. Sin duda alguna, el narcotráfico es un problema político que se entrelaza, hoy más que nunca, con la crisis del régimen bipartidista.

IV. La crisis política que se cuestiona

Hasta hace relativamente pocos años, la "clase política" no aceptaba la existencia de una crisis política en el país, en parte porque la situación habitual de crisis sucesivas durante largos años proyectó una actitud de cinismo en los grupos de la dirigencia nacional, y en parte porque la sociedad no había alcanzado los niveles de deterioro que se experimentan últimamente. El Frente Nacional era percibido por su carácter bienhechor, sobre todo si se tiene en cuenta que los directamente beneficiados difícilmente

podrían cuestionarlo. No se reconocía la extrema dificultad de ingreso al campo político establecido por el régimen cuando no se esgrimía cualquier rótulo que cupiera dentro del bipartidismo. Es decir, no se aceptaban el derecho y la necesidad de sectores en expansión de buscar alternativas por fuera del monopolio que de hecho continuaban ejerciendo los partidos tradicionales una vez que se inició el "desmonte" formal del Frente Nacional. La apatía y despolitización de la sociedad civil pasaba desapercibida. Los altos índices de abstención electoral no eran motivo de preocupación, excepto cuando disminuían tímidamente en ciertas coyunturas, como la de las elecciones de 1970, para alterar el resultado predeterminado por las decisiones políticas. En consecuencia, la legitimación formal electoral satisfacía a quienes se sentían dueños del destino político del país. Sencillamente, todos los problemas que se identificaban desde fuera del régimen, se consideraban como costos normales de la democracia.

Por otra parte, la gran crisis económica que se inició a fines de la pasada década y que hizo más visibles los problemas sociales y políticos, se veía como un mal venido de afuera del país, similar a la calificación de "importada" de la ideología comunista que, según los apologistas del sistema, creaba artificialmente dificultades y dañaba la imagen colombiana. El régimen político bipartidista operaba como un gigantesco ghetto, a espaldas de la gestión y desarrollo de grandes procesos sociales y políticos. Inclusive, las coyunturas de crisis económicas siempre estuvieron amortiguadas o contrarrestadas por el azar de las heladas cafeteras en Brasil, o por la llamada economía subterránea del contrabando, la marihuana y la cocaína. La "economía del rebusque", o sector

informal como se le conoce elegantemente, completaba el cuadro que maquillaba el buen transcurrir colombiano, según percepción de quienes se consideraban como la clase dirigente nacional.

No obstante todo lo que se ha reseñado sumariamente, es posible afirmar que el proceso de toma de conciencia oficial de que "algo" andaba mal se inició de manera muy difusa y desigual en el seno del régimen político desde hace ya varios años. Quizás fue la institución militar la que comenzó el proceso. Su confrontación temprana con la subversión, subversión derivada en gran medida del bloqueo frentenacionalista a la participación política fuera del bipartidismo, la hizo especialmente sensible a los problemas. Aunque los militares entendían la significación del caldo de cultivo de la miseria social causada por la ya reconocida concentración extrema del ingreso y la riqueza nacionales, su concepción ideológica daba prioridad al comunismo foráneo como el causante de todos los males de la patria. De ahí la exigencia militar al presidente López de aumentar la represión, a raíz del paro nacional de septiembre de 1977. Pero la respuesta a tal exigencia solamente se concretó recién comenzado el gobierno siguiente, el del presidente Turbay Ayala.

El gobierno del presidente López tuvo gran significación para el desenvolvimiento del proceso que llevó al reconocimiento de la crisis y a la búsqueda de posibles soluciones. La candidatura presidencial de López fue la gran esperanza para compensar las frustraciones de quienes aún creían en un reformismo dirigido desde las toldas de la tradición bipartidista. Así lo presagiaban sus antecedentes de crítico del Frente

Nacional desde el MRL y el carácter del futuro gobierno que iniciaba el desmonte del monopolio bipartidista. No obstante, las ejecutorias del cuatrenio 1974-1978 acabaron con tal esperanza y ratificaron la posición de los grupos que se habían ubicado por fuera de la cobertura del régimen. Los problemas sociales y políticos que se generaron durante este gobierno fueron los que aceleraron la preocupación de la institución militar con la violencia, fenómeno que se colocaba de nuevo como la expresión más visible de las crisis. A partir de allí, se desató la dinámica que condujo a la formación del primer proyecto político que pretendió solucionar, por la línea política de menor esfuerzo, un problema percibido de manera por demás confusa. Así comenzó un gobierno, el del presidente Turbay, volcado hacia la represión, con el fin de eliminar de una vez por todas las supuestas raíces de los males de la patria: la violencia y la ideología comunista.

Para el gobierno del liberal Turbay Ayala, la percepción de la crisis era muy sencilla, como sencillo pero brutal fue el intento de solución. Sin duda, fue una tenue apreciación política del problema. Ante todo, éste era catalogado como administrativo y técnico; un problema de necesidad de orden y organización: dados los males de toda nación fatalmente subdesarrollada, el comunismo y la subversión internacionales aprovechaban la situación para crear focos de violencia y alterar el orden público. Aunque la institución militar había luchado denodadamente por erradicar el mal, incluso con medios excepcionales como el estado de sitio casi permanente desde 1947, su función no había sido suficiente. En consecuencia, era necesario un Estatuto de Seguridad, es decir, toda la excepcionalidad posible en una democracia como la colombiana. En esta

forma mecánica se constituyó el modelo represivo turbayista, con todas sus características conocidas y desconocidas. La resultante fue su fracaso como solución, no obstante haya todavía quienes aseguren que el problema consistió en la insuficiencia de las medidas aplicadas. Con esta lógica, mientras no se extermine la subversión, y su definición es bien ambigua y ambivalente, no se erradicarán los males del país.

El fracasado modelo represivo del gobierno del presidente Turbay, que constituyó el primer experimento de solución de la actual crisis política nacional, condicionó el derrotero político subsiguiente. Quizás la influencia mayor fue la gestación de un proceso social de reconocimiento del carácter político de la crisis. La despolitización provocada por el Frente Nacional en amplios sectores de la sociedad colombiana tuvo un período de contención. A pesar de la alta dosis represiva durante los gobiernos anteriores, su acentuamiento desde septiembre del 78 sirvió para aclarar en muchos grupos sociales que el problema no radicaba únicamente en la subversión. Más importante aún, mostró que se habían atacado sus consecuencias pero no sus causas. Por tal razón, no fue accidental que en la campaña del 82 triunfara el candidato que mostraba una imagen diferente de la represiva. Además, uno de los puntales ideológicos de la competencia electoral fue la bandera de la paz. Naturalmente que la represión siempre ha sido justificada con el objetivo de la paz, pero lo esperado en ese entonces era la aparición de un medio diferente, de algo distinto a la fuerza para buscar la paz. De ahí que se pueda afirmar que el agotamiento del modelo represivo, como primer experimento nacional de solución de la crisis, con-

dicionó altamente el transcurrir político inmediato. Ante todo, obligó al reconocimiento social del problema, lo que permitió la formulación del segundo de los proyectos de solución, ya con conciencia de su carácter político, aunque sin mucha claridad sobre su definición.

V. Betancur y la repolitización del país

Si durante el gobierno del presidente Turbay la despolitización gestada por el régimen del Frente Nacional se estancó, durante el gobierno del presidente Betancur se inició una repolitización del país. Por vez primera, desde la época de la Violencia, un gobierno reconocía el carácter político de fenómenos que habían sido tratados hasta ese entonces como administrativos, técnicos, burocráticos o, a lo sumo, con un tono político de tinte clientelista. A las guerrillas, tradicional problema considerado de desorden público, se les dió un estatus claramente político. Otro tanto se hizo con problemas sociales, como el desempleo. Incluso, la baja representatividad del bipartidismo inició el tránsito hacia su calificación como problema. El comportamiento gubernamental fue consecuente desde un comienzo con esta perspectiva, articulando el conjunto de políticas con un gran objetivo general: la pacificación del país. Sin embargo, la figura presidencial logró mantenerse estratégicamente por encima de los procedimientos, como árbitro que juzgaba el comportamiento adecuado de un complicado y esquivo aparato político encargado de buscar la paz: el Congreso con la aprobación de una Ley de Amnistía proveniente de un proyecto de la oposición y con evasivas permanentes a su compromiso reformista, los dos partidos tradicionales con titubeos e indecisiones prolongadas frente a su

responsabilidad en beneficio de la paz, la rama judicial como rueda suelta y desprotegida del Estado, el ministerio público librando una lucha solitaria y poco comprendida, y, finalmente, las numerosas comisiones de paz, verificación y demás títulos, sin autoridad real, supuestamente representativas de una sociedad civil expectante y desorientada. Todo esto conformaba la síntesis de una parafernalia oficializada que veía prevenidamente la lucha de dos gladiadores que pretendían ser independientes: fuerzas armadas y guerrilla, entrecruzados extrañamente con un nuevo poder estimulado desde fuera y dentro del país: el narcotráfico.

La repolitización del país durante los agitados cuatro años del gobierno Betancur fue un proceso bastante complicado. La paz como objetivo fue lo único claro para todo mundo. Pero la paz como significado absorbió todas las definiciones posibles, en concordancia con los diferentes niveles de conciencia y de intereses políticos de grupos, clases, estamentos e instituciones de la sociedad. Todos deseaban la paz, pero una paz a su acomodo. Este símbolo logró disimular por buen tiempo las contradicciones existentes y la ausencia de una clara dirección gubernamental, hasta que por fin estalló su contenido a partir de la mitad del año 85 con el rompimiento de la tregua con el M-19. De ahí en adelante, el Ejecutivo perdió gran parte de la fuerza que había logrado conservar del inmenso capital político recibido en sus comienzos. El bipartidismo, las guerrillas, la fuerza armada, el Congreso, y otros poderes menores comenzaron a esgrimir sin disimulos sus respectivos intereses, frente a un gobierno que conjugaba su afán de mostrarse poderoso, con la conveniencia que para el mismo fin distintas fuerzas dejaban traslucir. Este

fue el caso de las FARC, que deseaban mantenerse en tregua, y de la UP, que dependía en su existencia de la misma. La situación ambivalente de confrontación de fuerzas políticas tuvo su desenlace en noviembre del 85 con el trágico y conocido episodio del Palacio de Justicia. El perfil político del Ejecutivo descendió a partir de allí a su más bajo nivel, arrastrando consigo gran parte del prestigio de la figura presidencial, que no pudo conservar la asepsia que había construido. Indudablemente, el segundo experimento de solución de la crisis nacional había fracasado.

Las consecuencias políticas de este proyecto fueron dicididamente mayores que en el caso del gobierno que le antecedió. La repolitización social determinó la formación de una mayor conciencia política, pero de una conciencia que refleja las grandes contradicciones existentes entre las múltiples percepciones del común problema de la paz. Naturalmente, esta situación sirvió de motor ideológico de los conflictos que se desataron abiertamente desde mediados del año 85. Pero lo más complicado fue la resultante final del fenómeno: la polarización de las fuerzas políticas. Ya en ciertos momentos críticos de la coyuntura se había observado un tanto esta tendencia, por ejemplo, en el caso de la acusación del Procurador a algunos elementos militares y de la policía implicados en las actividades paramilitares del MAS. En ese entonces, se formaron dos grandes polos de opinión: uno de los militares y otro del Procurador, hasta que, finalmente, el Presidente Betancur, apoyado en su estrategia de árbitro del objetivo pacificador, apaciguó el conflicto. No obstante, la polarización política continuó su curso, hasta que, finalmente, con el episodio del Palacio de Justicia quedó

establecida: todas las "fuerzas vivas" a favor de la paz, pero unas en defensa de los métodos de diálogo y otras en busca de una solución de "mano dura". Surgió, así, la opción política del polo militar, como artífice obvio de la solución de fuerza. Esta situación quedó posteriormente congelada, aunque constituye una peligrosa reserva dentro del convulsionado ambiente nacional.

En el campo guerrillero las consecuencias del modelo Betancur fueron destacadas. Su legitimidad, es decir, la credibilidad pública de la lucha armada, sufrió un descalabro. La generosa ley de Amnistía, sumada a las tardías, improvisadas y débiles respuestas políticas de las guerrillas las colocaron en entredicho, como faltas de sinceridad ante la "magnanimidad" gubernamental. Esta visión se reforzó ante la "opinión pública", a raíz del rompimiento de la tregua por parte de varios grupos guerrilleros que se unieron con los que nunca la aceptaron, para formar la Coordinadora Nacional Guerrillera. Quedó establecido, así, una especie de desarme político de la guerrilla, que, a su vez, legitimaba y justificaba ante la sociedad civil la actividad represiva militar. El militarismo, de parte y parte, fue el corolario que ensombreció el proceso de paz y facilitó el desenlace de la toma del Palacio de Justicia.

Por otro lado, las FARO, aunque lentamente, supieron responder de manera más política al gobierno. No solamente suscribieron de primeros los acuerdos de tregua, sino que apoyaron un movimiento político nuevo, la Unión Patriótica, UP. Es más, se mantuvieron y se mantienen inestablemente en la tregua, y su movimiento civil, con el apoyo del Partido Comunista, se presentó a las últimas elecciones y ascendió en el campo

político institucional con una representación formal. Este ha sido, indudablemente, el resultado positivo más concreto del experimento Betancur. Además, sirvió para debilitar la posición militarista de la Coordinadora Guerrillera y la tendencia de polarización política en la sociedad colombiana.

Como última consecuencia política destacada cabe mencionar la reubicación de las fuerzas de izquierda en el país. La nueva izquierda, nacida en la década de los años sesenta como subproducto del Frente Nacional, experimentó un proceso de "aterrijaje". El idealismo, el dogmatismo y la falta de percepción de la realidad nacional, características presentes en la corta historia de las innumerables pretensiones de constituir partidos en la nueva izquierda, prácticamente desaparecieron. Asimismo, a la par con una mayor dispersión política, estas fuerzas fueron las mayores defensoras de la paz. Incluso, hubo deslindes en sus antiguas simpatías con la guerrilla, y muchas figuras de la izquierda se matricularon o por lo menos congeneraron con los sectores liberales que consideraban más democráticos, como el Lopismo y el Nuevo Liberalismo, con la esperanza de constituirse en la intelligentsia que guiara la reconstitución democrática del partido liberal. La situación de atomización y aparente desaparición de la nueva izquierda abrió, posiblemente, nuevas perspectivas de reorganización de las fuerzas democráticas de izquierda en el inmediato futuro. Lo acontecido con la nueva izquierda se complementó con un proceso lento pero constante que se ha gestado en muchos sectores populares, en el que, por diferentes causas, hay una tendencia de organización local, siempre con un trasfondo, implícito o explícito, de tipo político desligado del bipartidismo. El

asunto hace parte del fenómeno ya señalado de salida del campo de mediación del régimen, de gran número de relaciones políticas. Movimientos sociales en general, paros cívicos y un buen número de organizaciones con diversas caracterizaciones conforman un mundo celular que ha llegado hasta constituir principios de coordinación nacional. La elección popular de alcaldes y las reformas de descentralización municipal, únicas medidas concretas derivadas de toda la expectativa reformista que surgió con Betancur, se articulan con el proceso anterior como acicate que le proporciona mayor dinámica.

Para rematar esta breve visión de lo que fue el segundo proyecto de solución de la crisis del régimen bipartidista, es conveniente mencionar un par de condicionamientos de tipo económico que vivió este experimento. En primer término, el factor de crisis económica fue una constante importante durante el gobierno del presidente Betancur. Sin duda, este hecho limitó las posibilidades de asignación de recursos que pudiesen haber activado el proceso de paz. No obstante, los factores estructurales presentes en el régimen, como el ya mencionado de acumulación de capital electoral privado, dejan dudas sobre la viabilidad de un reformismo apoyado en una política nacional de redistribución del ingreso. Además, el reformismo del gobierno Betancur estuvo limitado claramente a una normatividad política que excluyó lo directamente social.

En segundo término, es importante hacer referencia a la política económica. Esta fue, sin duda, bastante heterogénea e, inclusive, contradictoria en muchos aspectos. Aparte de ello, no tuvo una constante dirección presidencial, como fue el caso de la política, sino, más bien,

una delegación de "carta blanca" a los tres ministros de hacienda que hubo. La única uniformidad observada fue la relacionada con la crisis del sector financiero que se presentó en los comienzos del período. La política observada fue siempre de beneficio del conjunto, sin excluir siquiera el caso del Grupo Grancolombiano. No parece que haya habido en toda la historia política del país una situación similar de subsidio del Estado a la empresa privada, en la que se socializaran inmensas pérdidas, generadas casi siempre por las prácticas especulativas que se establecieron en los altos círculos económicos privados. Esta política fue más aberrante si se tiene en cuenta la limitación de recursos del Estado en momentos de crisis y la publicitada política reformista, indispensable en una sociedad distinguida por los desequilibrios y las desigualdades sociales. No cabe duda que aquí se plantea una discusión de doble moral, puesto que fue el gobierno Betancur el que enarboló la bandera moralista que solamente había esgrimido el Nuevo Liberalismo. El rigor moral se aplicó, al menos retóricamente y con discutibles resultados positivos, especialmente en el caso del narcotráfico. Este es un tópico muy importante que ha venido encadenado en su condicionamiento a través de los sucesivos modelos de solución de la crisis política del régimen, hasta colocarse en el primer plano de los problemas por resolver. Faltaría ver si su manejo político ha sido adecuado y si el embrollo a que ha llegado forma parte de la condición de dependencia externa de la sociedad nacional.

VI. La indefinición política

El proceso de repolitización ocurrido durante la administración Betancur tuvo el claro subproducto de la aceptación por

todo el mundo de la existencia de una crisis política. Hay consenso nacional sobre la necesidad de hacer "algo" al respecto, pero algo de gran importancia y significación. No obstante, existen dos problemas mayores sobre el particular. El primero tiene que ver con la multiplicidad de consideraciones sobre la definición del asunto, que van desde la ya mencionada inculpa al comunismo y al terrorismo internacionales, o a la figura del expresidente Betancur por haberse inventado los problemas, hasta las más disímiles apreciaciones, como la pereza e indisciplina tradicionales de los colombianos, la mala fe de los políticos y hasta de los colombianos, la burocratización del Estado, el exceso de libertades y el desorden, la falta de un gobierno de mano dura y la impunidad. Estas y otras muchas consideraciones se esgrimen a diario en diversos círculos sociales sin que se vea ninguna tendencia de acuerdo sobre el tema. Cuando mucho se aceptan todas las razones y se coloca el asunto como una mezcla complicada de un poco de todo. El segundo de los problemas mayores sobre la crisis se refiere a que en los niveles directivos del país, tanto en lo político como en lo económico, no hay ninguna definición sobre lo que debe hacerse. Existen muchas dudas sobre los diagnósticos generales, aunque cualquier dirigente puede enunciar cantidad de fallas importantes, y una gran falta de seguridad sobre la acción política que convendría seguir. Hay acuerdo sobre el carácter político del problema, pero no aparece diseño coherente alguno que proyecte una solución, aunque hay creciente preocupación por encontrarla. Como puede apreciarse, entonces, tal parece que la influencia del modelo de solución política del gobierno Betancur sobre la conducta futura se extendió a muchos sectores de la sociedad, entre los cuales el más destacado es el propio gobierno que

se inauguró en agosto de 1986, luego de un espectacular triunfo electoral.

El tercer modelo de solución de la crisis política, el del gobierno Barco, está basado en dos pilares fundamentales que son complementarios: por una parte, una ruptura con la herencia frentenacionalista que abolió las posibilidades de oposición institucional; por otra, una reconstitución del proceso de paz con el mote de "Rehabilitación, Normalización y Reconciliación". El primero de estos dos pilares, el "esquema gobierno-oposición" como lo denomina el gobierno, busca la institucionalización de los conflictos sociales y políticos, con el fin de que puedan ser manejados por el régimen. Todo el consenso que genere un gobierno popular y reformista, como postuló ser el actual, se ubicaría dentro y alrededor de un partido de gobierno, en este caso el liberal. Por su parte, la oposición se alinearía con el partido conservador, que temporalmente aceptó el reto con la fórmula de la "oposición reflexiva", y con otros movimientos y partidos, de los cuales el único existente es la Unión Patriótica. Aquí se pretende que todo el cúmulo de expresiones políticas que se sitúan actualmente al margen del régimen se integren a éste, con la inclusión pacífica hasta del movimiento guerrillero. El modelo gobiernista, que obedece a la teoría institucional funcional del conflicto, suponé que los partidos tradicionales poseen suficiente fortaleza como para reconstruir el régimen bipartidista, con la variante de la integración bajo su comando de todos los conflictos nacionales canalizados por una oposición institucionalizada. Sin embargo, es bastante dudoso que a estas alturas del desarrollo histórico colombiano sea posible una revitalización del bipartidismo, puesto que es poco factible que se integren fuerzas políticas

díscolas como subsidiarias de un sistema que las indujo por la necesidad creciente de rechazarlo. Además, existe una suposición agazapada en el contenido del "esquema", que es un intento de frenar el proceso de repolitización gestado durante el gobierno anterior, ante la creencia que sólo una especie de centrismo ideológico es susceptible de institucionalizar, y ¿qué mejor para ello que el tantas veces proclamado centrismo del bipartidismo? Se postula, y ha habido afirmaciones al respecto, que la lucha de clases únicamente se presenta cuando hay enfrentamiento ideológico entre la izquierda y la derecha. Es decir, se busca continuar con la exclusión de la confrontación de ideas dentro del régimen y se desconoce la existencia permanente de la lucha de clases en las sociedades y la posibilidad de institucionalizarla democrática y civilizadamente. Por último, se podría pensar que la elección popular de alcaldes constituye una posible entrada para la integración de nuevas fuerzas al sistema. Esto es cierto como posibilidad. No obstante, el régimen ha dado suficientes muestras de desconfianza en esta Ley para que se pueda pensar que desaparezca el bloqueo que está dando a tal entrada. El narcotráfico, la guerrilla, el clientelismo, la ignorancia popular y muchas otras razones más se han esgrimido como crítica desde dentro del régimen a la única reforma potencialmente democrática aprobada en muchos años.

El otro pilar del actual experimento de solución de la crisis es la continuación del proceso de paz gestado durante el gobierno anterior, pero con un ropaje lo más cambiado posible. Se supone que solamente con la pretendida despolitización es posible alcanzar la paz. Por ello, la renuencia a retomar el diálogo con las fuerzas existentes fuera de la

institucionalidad que, según los teóricos del modelo, fue la causa principal de la repolitización y, por lo tanto, alimento de la lucha de clases. La manera de tratar el problema, entonces, es quitándole el piso social, el caldo de cultivo, a la inconformidad. La erradicación de la "pobreza absoluta" dejaría sin fundamento a la protesta, puesto que la miseria constituye su apoyo. Aquí, casi que se podría concluir que las ideas de izquierda sólo son posibles de gestar con los estómagos vacíos. De todas maneras, la fórmula de la "rehabilitación" social con inversión oficial masiva es el prerequisite dentro del experimento para que haya "normalización", y solamente dentro de tal normalidad desideologizada es posible alcanzar la anhelada "reconciliación". ¿Cuánto tiempo habría que esperar para que los colombianos se reconcilien?

El proyecto político del gobierno presenta varios problemas adicionales, de los cuales cabe señalar dos. En primer término, se indica el problema del tiempo, de la oportunidad política. A pesar del decidido mandato político que significó el gran capital electoral alcanzado en mayo de 1986 por el presidente Barco y a pesar de su aparente convencimiento de la necesidad de continuar con tesón en la búsqueda de una solución a la reconocida crisis política nacional, da la impresión de que sólo comenzaron a plantearse los problemas una vez que se inauguró el gobierno. Al respecto, es importante recordar que el capital más susceptible de rápida valorización es el político, pero también es el más sensible a la desvalorización. De agosto a diciembre del pasado año 86, el gobierno solamente defendió y sacó adelante una reforma tributaria dudosamente redistributiva del ingreso. Ya en este año, al borde del límite de las facultades otorgadas, el

gobierno expidió una tímida norma de reorganización administrativa que fortalece la célula municipal. Tal medida representa la continuidad de la Reforma Constitucional sobre elección popular de alcaldes y de las leyes descentralizadoras promovidas por el anterior gobierno. De resto, no ha habido intención de llamamiento a sesiones extraordinarias al Congreso para discutir los numerosos proyectos de reforma existentes, quizás por razones políticas de escasa monta. En estas circunstancias, es difícil pensar que el capital político de que pueda disponer el gobierno en el futuro, alcance para adelantar el reformismo necesario para cumplir con los objetivos que encierra el poco claro tercer experimento de solución de la crisis.

El segundo problema del experimento que vale la pena consignar es el relacionado con la dinámica misma de la rehabilitación. La "erradicación de la pobreza absoluta" no deja de ser una consigna demagógica, por más buenas intenciones que se tengan. No existen los recursos de capital suficientes para adelantar los planes de inversión ya anunciados. Aun suponiendo que el gobierno los consiga, con infraestructura sólo se consigue un mayor desarrollo económico: modernización, disminución temporal del desempleo rampante y, quizás, ciertas mejoras en las condiciones de vida de muchos de los que nada tienen. Pero de ahí a pensar que se está atacando el problema estructural de la extrema concentración del ingreso y la riqueza nacionales, hay un abismo. Con voluntad política para adelantar reformas redistributivas del ingreso no son absolutamente indispensables grandes recursos de capital. El indicador de lo acontecido con la reforma tributaria da la tónica de los intereses que se mueven

para definir el nivel de voluntad política que permite el régimen. El problema no consiste únicamente en lo que se quiere, sino también en lo que se puede y, cabría agregar, en el momento en que conviene hacerlo.

Para cerrar la argumentación sobre las perspectivas que se aprecian del tercer intento de solución a la crisis política es necesario retomar la idea con que se inició este subtítulo: la diversidad de opiniones sobre el diagnóstico de la crisis y la falta de seguridad sobre sus fórmulas de solución. En efecto, es incuestionable la enorme gama de opiniones sobre lo que acontece en Colombia y la dificultad de precisarlas y sintetizarlas. Por su parte, poca duda existe sobre la desconfianza que despiertan no solamente las medidas que adelanta el gobierno, sino ante todo su proyecto político global. El común de las gentes no tiene ningún contacto con el modelo; únicamente sufren los multifacéticos efectos negativos de la crisis. Las clases dominantes no quieren entender qué es lo que pasa y no desean comprometerse en forma alguna con los esfuerzos del gobierno; solamente les interesa su seguridad económica y física inmediata. Las clases medias son el centro mismo de la confusión en el diagnóstico- en las soluciones de la crisis. Las guerrillas han retornado a su dispersión tradicional y poco esfuerzo hacen para pensar en términos francamente políticos. El partido conservador duda de su propia oposición. El partido liberal confiesa en secreto su temor por un eventual fracaso del gobierno. Y, finalmente, el mismo gobierno comienza a perder confianza en sus ejecutorias y trata de remendar sobre la marcha su destino. Esto, sin tener en cuenta las discordancias que se ven dentro del aparato de gobierno y la posición prevenida de los militares desde

el mismo mes de mayo cuando se gestó el gobierno, posición que ha ratificado la continuidad de su exclusiva política bélica de pacificación.

VII. Las perspectivas políticas

El problema de la crisis del régimen bipartidista no puede limitarse al reconocimiento de su carácter político, aunque ello es fundamental y ya se ha avanzado al respecto. El problema requiere una solución que es más difícil de alcanzar a medida que se profundizan y diversifican los fenómenos que se derivan de la situación política. La solución tiene que provenir necesariamente de -una concepción política global, de un proyecto político nacional, con toda la voluntad y decisión políticas que este concepto significa. La única manera de evitar que un proyecto político se traduzca en una "colcha de retazos" y que cada funcionario interprete el quehacer según su iniciativa ideológica, como ha acontecido hasta ahora, es con la fuerza que solamente puede proporcionarle el carácter nacional. En las circunstancias del momento, los proyectos que se creen no pueden provenir de teorías materializadas a espaldas de la necesaria formación de una voluntad popular, así tengan la bendición del bipartidismo que, para el caso, ha demostrado ser insuficiente. En el experimento Turbay hubo apoyo de muchos sectores dominantes, de clases medias y del bipartidismo, pero un heterogéneo rechazo popular. En el del presidente Betancur se manifestó un repudio casi unánime de las clases dominantes, no existió el apoyo del bipartidismo y solamente se sostuvo, dando tumbos, gracias al espontáneo y variable apoyo de sectores populares y de clases medias totalmente carentes de una dirección política. En el actual ex-

perimento gubernamental hay un desgano apoyo del bipartidismo y otras fuerzas menores, simplemente por ausencia de otra alternativa; los sectores populares se encuentran al margen del proceso, aunque se pregone que son el objeto del proyecto, y los grupos y clases dominantes francamente miran como ajenas las medidas de un gobierno sin clara identidad de dirección. Las fuerzas dominantes y otras más se hallan a la expectativa de los resultados del proceso, quizás a la espera de construir un proyecto que surja de la alternativa militar, cuyo carácter en forma alguna podría tener el sello político de lo nacional. Un proyecto político nacional tiene que movilizar, con rumbo claro, fuerzas suficientes para arrastrar una tendencia de consenso y para contrarrestar con decisión los poderes reacios que seguramente se sientan afectados por la concepción y por las medidas diseñadas. Esta es la base de la fuerza política que se requiere para la solución de un problema de la magnitud del que se vive.

El proyecto político que tienda a solucionar la actual crisis de legitimidad del régimen bipartidista no requiere que sea revolucionario. Las revoluciones se han gestado generalmente a partir de crisis de dominación en los sistemas sociales. Lo que sí debe contener necesariamente el proyecto político de solución es un cambio del régimen que se cuestiona. Adicionalmente, se debe plantear un reformismo lo suficientemente profundo como para inhibir la pronta reproducción de una nueva crisis dentro de otro contexto político. En otras palabras, las reformas no deben ser solamente de las reglas del juego político, sino también de diversas relaciones sociales. Desde el punto de vista de un análisis académico-político, a continuación se enuncian tres bloques de

factores estructurales que alimentan la crisis, enfrentados a una serie de obstáculos para removerlos. El primer bloque refleja la esencia del actual régimen político. Los otros dos, el núcleo de los lastres que requieren un reformismo social. Este balance permite vislumbrar, dentro del carácter de primera aproximación que representa este ensayo, la dirección de las perspectivas políticas para el inmediato futuro.

El primer bloque de factores se sitúa en las instituciones del Estado que se encuentran al servicio inmediato de intereses particulares, sin que medie antes un principio de beneficio social. No solamente el plano electoral, aunque éste da la tónica, sino también el lucro fácil, la corrupción administrativa y los privilegios gremiales son componentes de la "privatización" en que se halla el Estado. Aquí no existe necesidad alguna de reducción del radio de acción estatal, como propugna la moda de aquellos a quienes no les conviene la fortaleza del Estado o no quieren entender la esencia de la crisis. El problema se reduce a comprender que el Estado es débil, a pesar de su capacidad de movilización de recursos, y que es necesario un cambio cualitativo que lo proyecte hacia el beneficio colectivo.

Frente a este lastre estructural, el obstáculo mayor de su remoción lo constituye la organización del bipartidismo en su papel de administrador monopólico de las instituciones del Estado. No son los partidos como tales, sino su imbricación funcional con las heterogéneas prácticas clientelistas lo que determina su particular forma de reproducción. Aquí se podría alegar que el esquema actual de gobierno-oposición configura un principio de remoción de este obstáculo. Ello sería- aceptable, si el

experimento no tuviera en su trasfondo una base de reconstitución del bipartidismo y la continuidad del clientelismo con beneficio en primer término para el partido de gobierno. Es un cambio importante pero de mecánica, y sin la trascendencia de variación cualitativa hacia una proyección que incluya los sectores externos al régimen. Solamente así sería factible un comienzo de "desmonte" del clientelismo como columna vertebral de la reproducción del sistema.

El segundo bloque de factores estructurales que alimenta la crisis es la bien apuntalada concentración del ingreso y la riqueza nacionales. La redistribución económica no exige inversiones, aunque su acción no puede hacerse a costa de un estancamiento del crecimiento. Es una medida eminentemente política, que requiere una voluntad en tal sentido, gran rapidez en su implementación y un respaldo de poder que sólo puede provenir de los sectores sociales que se benefician, a través de formas de organización sustentadas en la movilización. Las condiciones de apoyo y movilización política efectiva deben partir de los mismos postulados ideológicos de la redistribución económica. Estos principios que apuntan a la implementación de una democracia social no pueden desligarse de los que identifican la democracia puramente política, es decir, una mayor participación ciudadana. El mesianismo, el autoritarismo y el exclusivismo constituyen la trilogía que ha regido el tono elitista que han encerrado las prácticas políticas tradicionales en Colombia, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda.

Los obstáculos a la remoción de este bloque son innumerables, pues de lo que

se trata es de romper con la estructura de un capitalismo espoliador, voraz e improductivo y de frenar la tendencia de concentración del ingreso. Se trata, también, de crear una dinámica productiva, apoyada en la formación de un verdadero mercado interno; de eliminar el capital ocioso y de trancar la tendencia especulativa en desmedro de la producción. Por eso, los obstáculos se ubican en la mayor parte de los grupos poderosos y su neutralización no puede ser distinta a la política. Sería tan fácil crear una conciencia social en los grupos eventualmente beneficiarios, coma difícil, pero no imposible, lograrlo en los que en apariencia saldrían perjudicados. Una nueva conciencia empresarial debería reemplazar el actual ambiente pseudo-empresarial de lucro fácil sin responsabilidad de creación de valor. Pero hay un freno a tal ideal, situado en el estado en que se encuentra el desarrollo mismo del capitalismo. En efecto, las tendencias de concentración del "capitalismo salvaje" han penetrado todo el sistema mundial, con diferentes grados en los niveles nacionales. Sin embargo, no es utópico pensar en un deslinde de los procesos productivos articulados estructuralmente al sistema global universal, de aquellos que no se conectan con éste para definir las decisiones de su dirección. Habría que contar con estos últimos y con los de carácter más doméstico, para involucrarlos en una movilización, teniendo en cuenta que los procesos productivos no son cosas sino expresiones económicas de grupos y clases sociales.

Finalmente, el tercer bloque de factores que alimenta la crisis de legitimidad del régimen bipartidista es el anquilosamiento en que se encuentran los parámetros de propiedad del suelo y de distribución de sus beneficios. Esto que

hace varias décadas se hubiera definido como la necesidad de una reforma agraria, se ha trocado en algo bien complejo. El país no solamente se ha urbanizado, sino que su antiguo carácter agrario se ha tornado también industrial, mercantil y diversificado en varias formas de organización económico-social. Al típico problema agrario se ha sumado el problema urbano y otros fundamentales, como el de distribución de bienes y servicios. Inclusive, el problema agrario requiere definiciones regionales particulares articuladas entre sí. Pero el común denominador de los problemas rural y urbano es la distribución del suelo, la normatividad de su propiedad y la forma como se proyectan los beneficios obtenidos de su explotación económica. Remover este bloque es fundamental, puesto que es el complemento de la redistribución económica mencionada anteriormente. No solamente debe servir para reafirmar las políticas redistributivas, sino, ante todo, para frenar estructuralmente la tendencia nacional de concentración del ingreso y la riqueza.

Las perspectivas de rectificación de este lastre son bien difíciles. La tendencia histórica del reformismo social en Colombia es su misma inexistencia, dado el bloqueo de los pocos intentos que se han hecho. En ese aspecto, se han complementado los intereses de los grupos dominantes con los de la "clase política". Junto con las medidas necesarias para la eliminación de los dos bloques anteriores, este último también requiere de la fuerza política de la sociedad civil. Es a partir de las organizaciones que allí existen que se puede pensar en ampliar el camino de la democracia, tanto política como social. Alimentar la democracia desde arriba, desde las instituciones del Estado y con la iniciativa de los grupos dominantes, es

una utopía. Sus decisiones deben ser el producto de las presiones políticas organizadas que nazcan de la sociedad civil. Afortunadamente, ya hay bastante conciencia de ello, apoyada en los experimentos de organización social que han emergido sobre todo durante la última década de vida nacional. La violencia ha cumplido un papel funcional en tal sentido, puesto que ha servido de estímulo para este principio de solución. Sucesivas violencias que han sido la forma principal de expresión de las crisis políticas, por razón de ser productos de un sistema social que las reproduce, finalmente contribuyen a gestar su solución en el seno de su propio medio. El hecho de que la antigua violencia, identificada casi totalmente como política, se haya trocado en buena medida en violencia social, ha inducido una preocupación colectiva por su solución. Esta formación de conciencia debe constituirse en el principio de transformación de la estructura social y de solución de la crisis política.

Fraucisrn Leal Buitrago, politólogo, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.